

REPÚBLICA DE COLOMBIA



TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA

Santiago de Cali, 16 MAR 2020

Auto Interlocutorio Nro. 20A

MAGISTRADO PONENTE: EDUARDO ANTONIO LUBO BARROS

MEDIO DE CONTROL:	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO - LABORAL
REFERENCIA:	76001-23-33-000-2020-00126-00
DEMANDANTE:	LETICIA LONDOÑO JARAMILLO
DEMANDADO:	NACION – MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL – FOMAG, MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI y ALBA MARINA DIAZ SERNA
ASUNTO:	ADMITE DEMANDA

ANTECEDENTES

La señora Leticia Londoño Jaramillo a través de apoderado judicial, mediante el ejercicio del medio de control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho consagrado en el artículo 138 del CPACA, pretende¹ la nulidad de los siguientes actos administrativos:

- Resolución nro. 4143.0.21.1064 del 15 de febrero de 2013², por medio de la cual se reconoció una pensión post mortem en favor de la señora Alba Marina Díaz Serna, madre del causante.
- Resolución nro. 4143.0.21.9392 del 24 de octubre de 2014³, por medio de la cual el FOMAG negó una pensión post mortem a la demandante.

A título de restablecimiento del derecho solicitó que se disponga el reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes a favor de la demandante a partir del 11 de noviembre de 2008 fecha del deceso del causante Marino Antonio Serna Díaz, el pago de las mesadas adicionales de junio y diciembre, incrementos de ley, sumas debidamente indexadas y condena en costas del proceso.

CONSIDERACIONES

Corresponde al Despacho pronunciarse sobre el medio de control Nulidad y Restablecimiento del Derecho, a fin de verificar si la misma cumple los requisitos legales, para ser admitida.

1. DE LA JURISDICCIÓN

Conforme al artículo 104 del CPACA la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo está instituida para conocer además de lo dispuesto en la Constitución Política y en las leyes especiales, de las controversias y litigios originados en actos, contratos, hechos, omisiones y operaciones, sujetos al derecho

¹ Ver folio 1 - 3

² Ver folio 14

³ Ver folios 11 - 13



administrativo, en los que estén involucradas las entidades públicas, o los particulares cuando ejerzan función administrativa.

2. DE LA COMPETENCIA

2.1. Factor funcional

En cuanto a la competencia funcional el CPACA indica:

"ARTICULO 152. COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES ADMINISTRATIVOS EN PRIMERA INSTANCIA. Los Tribunales Administrativos conocerán en primera instancia de los siguientes asuntos:

(...)

2. De los de nulidad y restablecimiento del derecho de carácter laboral que no provengan de un contrato de trabajo, en los cuales se controviertan actos administrativos de cualquier autoridad, cuando la cuantía exceda de cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes."

En el asunto concreto, se pretende la nulidad de los actos administrativos, configurado frente a la negativa de la pensión de sobrevivientes, por lo que resulta ser de carácter laboral y no proviene de un contrato de trabajo, siendo competencia de este Tribunal.

2.2. Factor territorial

En cuanto a la competencia territorial el CPACA señala:

"Artículo 156. Competencia por razón del territorio. Para la determinación de la competencia por razón del territorio se observarán las siguientes reglas:

(...)

3. En los asuntos de nulidad y restablecimiento del derecho de carácter laboral se determinará por el último lugar donde se prestaron o debieron prestarse los servicios."

En el presente asunto, se observa que el último lugar de trabajo el causante Marino Antonio Serna Díaz fue en la Institución Educativa Carlos Holguín Mallarino del municipio de Cali - Valle del Cauca⁴ ubicada en la ciudad de Cali, en tal sentido se encuentra debidamente configurada la competencia por el factor territorial en el presente asunto.

2.3 Factor Cuantía

El artículo 157 del CPACA señala:

"ARTÍCULO 157. COMPETENCIA POR RAZÓN DE LA CUANTÍA. Para efectos de competencia, cuando sea del caso, la cuantía se determinará por el valor de la multa impuesta o de los perjuicios causados, según la estimación razonada hecha por el actor en la demanda, sin que en ello pueda considerarse la estimación de los perjuicios morales, salvo que estos últimos sean los únicos que se reclamen. (...)

Para los efectos aquí contemplados, cuando en la demanda se acumulen varias pretensiones, la cuantía se determinará por el valor de la pretensión mayor.

⁴ Ver folio 11



2

En las acciones de nulidad y restablecimiento del derecho no podrá prescindirse de la estimación razonada de la cuantía, so pretexto de renunciar al restablecimiento.

La cuantía se determinará por el valor de las pretensiones al tiempo de la demanda, sin tomar en cuenta los frutos, intereses, multas o perjuicios reclamados como accesorios, que se causen con posterioridad a la presentación de aquella.

Cuando se reclame el pago de prestaciones periódicas de término indefinido, como pensiones, la cuantía se determinará por el valor de lo que se pretenda por tal concepto desde cuando se causaron y hasta la presentación de la demanda, sin pasar de tres (3) años."

El apoderado del demandante, estimó la cuantía en \$45.801.150⁵ al reclamarse la pensión de sobrevivientes el asunto es de carácter laboral y la cuantía resulta mayor a 50 smlmv⁶, y esta Corporación es competente para conocer del presente asunto.

3. REQUISITO DE CONCILIACIÓN PREJUDICIAL

La conciliación prejudicial es requisito respecto de derechos inciertos y discutibles, razón por la que dicha exigencia no es aplicable en asuntos pensionales por tratarse de derechos ciertos e irrenunciables⁷.

Sin embargo a folio 80 se observa que el demandante agotó la conciliación prejudicial ante la Procuraduría 20 Judicial para asuntos Administrativos.

4. DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN

Respecto de la caducidad de los medios de control en la interposición de la acción contencioso administrativa de nulidad y restablecimiento, el CPACA dispone sobre prestaciones periódicas:

"ARTÍCULO 164. OPORTUNIDAD PARA PRESENTAR LA DEMANDA. La demanda deberá ser presentada:

1. En cualquier tiempo, cuando:

(...)

c) Se dirija contra actos que reconozcan o nieguen total o parcialmente prestaciones periódicas (...)"

En consecuencia, al ser el caso un asunto pensional el medio de control se puede instaurar en cualquier tiempo⁸.

5. DEL PODER Y LA LEGITIMACIÓN EN ACTIVA Y PASIVA

Con relación a la legitimación por activa, se tiene a esta como la posibilidad que tiene aquella persona que ha sufrido un daño para obtener el resarcimiento mismo por medio de la jurisdicción contenciosa administrativa.

⁵ Ver folio 5

⁶ Salario mínimo 2019 (\$828.116 * 50 = \$41.405.800) - año en que se radica la demanda ver folio 82

⁷ Consejo de Estado, Sección Segunda – Subsección A, CP RAFAEL FRANCISCO SUAREZ VARGAS, providencia del 21 de febrero de 2019. Radicación número: 08001-23-31-000-2013-00160-02(0075-17) estableció: "Como consecuencia de lo anterior, y para resumir la discusión planteada por la demandada, las prestaciones periódicas como las pensionales, en este caso, la pensión gracia, tiene el carácter de irrenunciable como principio mínimo fundamental, posición que no obliga a cumplir el trámite de conciliación extrajudicial aun cuando la entidad que reconoció el derecho es quien impugna su legalidad"

⁸ Consejo de Estado, Sección Segunda – Subsección A, CP RAFAEL FRANCISCO SUAREZ VARGAS, providencia del 21 de febrero de 2019. Radicación número: 08001-23-31-000-2013-00160-02(0075-17) estableció "Para el sub judice, es claro que el numeral 1), del artículo 164, del CPACA, determina que la demanda podrá presentarse en cualquier tiempo, cuando las pretensiones versen sobre prestaciones periódicas, de manera que, como la controversia tiene relación con ese tipo de prestaciones, no está sometida al término de caducidad y se puede demandar en cualquier tiempo".



El artículo 160 del CPACA, respecto al derecho de postulación versa:

“Quienes comparezcan al proceso deberán hacerlo por conducto de abogado inscrito, excepto en los casos en que la ley permita su intervención directa.”

A folios 7 y 8, obra poder otorgado por la parte demandante, para que se lleven a cabo las presentes diligencias, razón por la cual se encuentra debidamente configurado el derecho de postulación.

Frente a la legitimación y la representación de las entidades dispone el artículo 159 del CPACA:

“Las entidades públicas, los particulares que cumplen funciones públicas y los demás sujetos de derecho que de acuerdo con la ley tengan capacidad para comparecer al proceso, podrán obrar como demandantes, demandados o intervinientes en los procesos contencioso administrativos, por medio de sus representantes, debidamente acreditados.

La entidad, órgano u organismo estatal estará representada, para efectos judiciales, por el Ministro, Director de Departamento Administrativo, Superintendente, Registrador Nacional del Estado Civil, Procurador General de la Nación, Contralor General de la República o Fiscal General de la Nación o por la persona de mayor jerarquía en la entidad que expidió el acto o produjo el hecho.

El Presidente del Senado representa a la Nación en cuanto se relacione con la Rama Legislativa; y el Director Ejecutivo de Administración Judicial la representa en cuanto se relacione con la Rama Judicial, salvo si se trata de procesos en los que deba ser parte la Fiscalía General de la Nación.”

El apoderado de la parte demandante dentro de la descripción fáctica hecha en el escrito de demanda, hace imputaciones contra el Ministerio de Educación – FOMAG y municipio de Cali. En ese orden de ideas, la parte demandante y la entidad demandada están legitimadas, por activa y por pasiva respectivamente, para actuar en las presentes actuaciones.

El artículo 610 del CGP indica la intervención de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado en los procesos que se tramiten ante cualquier jurisdicción en la que intervengan entidades públicas, para defender los intereses patrimoniales del Estado.

Pues bien, el Decreto 4085 de 2011, respecto del objetivo de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, señala:

"ARTÍCULO 2o. OBJETIVO. La Agencia tendrá como objetivo el diseño de estrategias, planes y acciones dirigidos a dar cumplimiento a las políticas de defensa jurídica de la Nación y del Estado definidas por el Gobierno Nacional; la formulación, Evaluación y difusión de las políticas en materia de prevención de las conductas antijurídicas por parte de servidores y entidades públicas del daño antijurídico y la extensión de sus efectos, y la dirección, coordinación y ejecución de las acciones que aseguren la adecuada implementación de las mismas, para la defensa de los intereses litigiosos de la Nación.

PARÁGRAFO. Para efectos este decreto. Entiéndase por intereses litigiosos de la Nación, los siguientes:

- a) Aquellos en los cuales esté comprometida una entidad de la Administración Pública del orden nacional por ser parte en un proceso”.



18

Por tratarse en el presente asunto de una entidad del orden nacional, se deberá notificar a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado al correo electrónico, conforme lo indica el parágrafo del artículo 3 del Decreto 1365 de 2013 que dice:

"Para efectos de las notificaciones personales que se deban realizar a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, se entenderá que el correo electrónico cumple los mismos propósitos que el servicio postal autorizado para enviar la copia de la demanda, de sus anexos y del auto admisorio, en los términos del artículo 197 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. En estos casos, no será necesaria la remisión física de los mencionados documentos".

6. DE LOS REQUISITO FORMALES.

De igual forma se cumple con la totalidad de los requisitos establecidos en los artículos 162 (requisitos de la demanda⁹), 163 (individualización de pretensiones) y 164 (oportunidad de la demanda) de la Ley 1437 de 2011.

Aunado a lo anterior se allegaron los anexos pertinentes que exige el art. 166, incluyendo copia de la demanda en mensaje de datos para los efectos del inciso 3 del art. 199, modificado por el art. 612 de la Ley 1564 de 2012.

Por reunir los requisitos legales el Despacho,

RESUELVE

PRIMERO: ADMITIR la demanda instaurada por la señora **LETICIA LONDOÑO JARAMILLO** por medio de apoderado judicial, en contra de la **NACION – MINISTERIO DE EDUCACION – FOMAG, MUNICIPIO DE CALI y ALBA MARINA DIAZ SERNA**, y en consecuencia dispone:

SEGUNDO: NOTIFICAR este auto al demandante en la forma prevista en el artículo 201 del CPACA, quien podrá consultarlo en la página web: www.ramajudicial.gov.co.

TERCERO: No hay lugar a fijar gastos ordinarios del proceso, pues la notificación personal corresponde a la parte actora; no obstante, de requerirse expensas, éstas se fijarán en su oportunidad.

CUARTO: NOTIFICAR personalmente la presente providencia a la parte demandada **NACION – MINISTERIO DE EDUCACION – FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO - FOMAG, MUNICIPIO DE CALI** y señora **ALBA MARINA DIAZ SERNA**, al señor **AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO** y a la **AGENCIA NACIONAL DE LA DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO** a los buzones de correo electrónico creados por dichas entidades para efecto de recibir notificaciones judiciales de conformidad con lo establecido en los artículos 197, 198 y 199 del CPACA.

⁹ Designación de las partes: folio 1
Pretensiones: folios 1 - 2
Hechos y omisiones: folios 2 - 3
Fundamentos de derecho: folios 3 - 4
Pruebas: folios 4 - 5
Estimación razonada de la cuantía: folio 5
Dirección para notificación: folio 15



Como no se fijan gastos ordinarios del proceso, para cumplir lo anterior, **ORDENAR a la parte demandante**, de acuerdo con el artículo 199 del CPACA, **remitir** a quienes deben ser notificados personalmente, en el término improrrogable de DOS (02) DÍAS HÁBILES, contados a partir de la notificación por estado de la presente providencia, a través del servicio postal autorizado, copia de la demanda, de sus anexos y de este auto admisorio, sin perjuicio de las copias que deban quedar en el expediente a disposición de los notificados.

Así mismo, deberá aportar, dentro de los CINCO (05) DÍAS HÁBILES siguientes a la notificación por estado de la presente providencia, certificación de la entidad de servicio postal autorizado, en la que conste la remisión efectiva de la copia de la demanda, sus anexos y del auto admisorio, para lo cual allegará copia del oficio remisorio a la Secretaría del Tribunal.

Hasta tanto no se alleguen las constancias anteriormente referidas, la Secretaría de esta Corporación no realizará la notificación personal a los demandados. El incumplimiento de esta carga procesal dará lugar a la aplicación del artículo 178 del CPACA.

QUINTO: A las demandadas **NACION – MINISTERIO DE EDUCACION – FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO - FOMAG, MUNICIPIO DE CALI** y a la señora **ALBA MARINA DIAZ SERNA**, al señor **AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO** y a la **AGENCIA NACIONAL DE LA DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO** se les correrá traslado de esta demanda por el término de treinta (30) días para contestarla, proponer excepciones, pedir pruebas, llamar en garantía y en su caso, proponer demanda de reconvención, acorde con el artículo 172 del CPACA. Este plazo comenzará a correr al vencimiento del término común de veinticinco (25) días después de surtida la última notificación, como dispone el artículo 199 del CPACA.

SEXTO: ADVERTIR a la entidad demandada que durante el tiempo para dar respuesta a la demanda, deberá allegar con la contestación, **el expediente administrativo que contenga los antecedentes de la actuación que se demanda** y se encuentre en su poder. La inobservancia de este deber constituye falta disciplinaria gravísima del funcionario encargado del asunto (artículo 175, parágrafo 1º del CPACA).

SEPTIMO: RECONOCER PERSONERÍA para actuar, como apoderado de la parte demandante, al abogado RODRIGO CID ALARCON LOTERO, identificado con cédula de ciudadanía No. 16.478.542 y portador de la tarjeta profesional No. 73.019 del Consejo Superior de la Judicatura, en los términos y para los efectos a que alude el memorial poder por el presentado¹⁰.

NOTIFÍQUESE Y CUMPLASE,


EDUARDO ANTONIO LUBO BARROS
Magistrado

¹⁰ Ver folios 7 - 8

REPÚBLICA DE COLOMBIA



TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA

Santiago de Cali, 16 MAR 2020

Auto Interlocutorio Nro. 20A

MAGISTRADO PONENTE: EDUARDO ANTONIO LUBO BARROS

MEDIO DE CONTROL:	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO - LABORAL
REFERENCIA:	76001-23-33-000-2020-00126-00
DEMANDANTE:	LETICIA LONDOÑO JARAMILLO
DEMANDADO:	NACION – MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL – FOMAG, MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI y ALBA MARINA DIAZ SERNA
ASUNTO:	ADMITE DEMANDA

ANTECEDENTES

La señora Leticia Londoño Jaramillo a través de apoderado judicial, mediante el ejercicio del medio de control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho consagrado en el artículo 138 del CPACA, pretende¹ la nulidad de los siguientes actos administrativos:

- Resolución nro. 4143.0.21.1064 del 15 de febrero de 2013², por medio de la cual se reconoció una pensión post mortem en favor de la señora Alba Marina Díaz Serna, madre del causante.
- Resolución nro. 4143.0.21.9392 del 24 de octubre de 2014³, por medio de la cual el FOMAG negó una pensión post mortem a la demandante.

A título de restablecimiento del derecho solicitó que se disponga el reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes a favor de la demandante a partir del 11 de noviembre de 2008 fecha del deceso del causante Marino Antonio Serna Díaz, el pago de las mesadas adicionales de junio y diciembre, incrementos de ley, sumas debidamente indexadas y condena en costas del proceso.

CONSIDERACIONES

Corresponde al Despacho pronunciarse sobre el medio de control Nulidad y Restablecimiento del Derecho, a fin de verificar si la misma cumple los requisitos legales, para ser admitida.

1. DE LA JURISDICCIÓN

Conforme al artículo 104 del CPACA la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo está instituida para conocer además de lo dispuesto en la Constitución Política y en las leyes especiales, de las controversias y litigios originados en actos, contratos, hechos, omisiones y operaciones, sujetos al derecho

¹ Ver folio 1 - 3

² Ver folio 14

³ Ver folios 11 - 13



administrativo, en los que estén involucradas las entidades públicas, o los particulares cuando ejerzan función administrativa.

2. DE LA COMPETENCIA

2.1. Factor funcional

En cuanto a la competencia funcional el CPACA indica:

"ARTICULO 152. COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES ADMINISTRATIVOS EN PRIMERA INSTANCIA. Los Tribunales Administrativos conocerán en primera instancia de los siguientes asuntos:

(...)

2. De los de nulidad y restablecimiento del derecho de carácter laboral que no provengan de un contrato de trabajo, en los cuales se controviertan actos administrativos de cualquier autoridad, cuando la cuantía exceda de cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes."

En el asunto concreto, se pretende la nulidad de los actos administrativos, configurado frente a la negativa de la pensión de sobrevivientes, por lo que resulta ser de carácter laboral y no proviene de un contrato de trabajo, siendo competencia de este Tribunal.

2.2. Factor territorial

En cuanto a la competencia territorial el CPACA señala:

"Artículo 156. Competencia por razón del territorio. Para la determinación de la competencia por razón del territorio se observarán las siguientes reglas:

(...)

3. En los asuntos de nulidad y restablecimiento del derecho de carácter laboral se determinará por el último lugar donde se prestaron o debieron prestarse los servicios."

En el presente asunto, se observa que el último lugar de trabajo el causante Marino Antonio Serna Diaz fue en la Institución Educativa Carlos Holguín Mallarino del municipio de Cali - Valle del Cauca⁴ ubicada en la ciudad de Cali, en tal sentido se encuentra debidamente configurada la competencia por el factor territorial en el presente asunto.

2.3 Factor Cuantía

El artículo 157 del CPACA señala:

"ARTÍCULO 157. COMPETENCIA POR RAZÓN DE LA CUANTÍA. Para efectos de competencia, cuando sea del caso, la cuantía se determinará por el valor de la multa impuesta o de los perjuicios causados, según la estimación razonada hecha por el actor en la demanda, sin que en ello pueda considerarse la estimación de los perjuicios morales, salvo que estos últimos sean los únicos que se reclamen. (...)

Para los efectos aquí contemplados, cuando en la demanda se acumulen varias pretensiones, la cuantía se determinará por el valor de la pretensión mayor.

⁴ Ver folio 11



2

En las acciones de nulidad y restablecimiento del derecho no podrá prescindirse de la estimación razonada de la cuantía, so pretexto de renunciar al restablecimiento.

La cuantía se determinará por el valor de las pretensiones al tiempo de la demanda, sin tomar en cuenta los frutos, intereses, multas o perjuicios reclamados como accesorios, que se causen con posterioridad a la presentación de aquella.

Cuando se reclame el pago de prestaciones periódicas de término indefinido, como pensiones, la cuantía se determinará por el valor de lo que se pretenda por tal concepto desde cuando se causaron y hasta la presentación de la demanda, sin pasar de tres (3) años."

El apoderado del demandante, estimó la cuantía en \$45.801.150⁵ al reclamarse la pensión de sobrevivientes el asunto es de carácter laboral y la cuantía resulta mayor a 50 smlmv⁶, y esta Corporación es competente para conocer del presente asunto.

3. REQUISITO DE CONCILIACIÓN PREJUDICIAL

La conciliación prejudicial es requisito respecto de derechos inciertos y discutibles, razón por la que dicha exigencia no es aplicable en asuntos pensionales por tratarse de derechos ciertos e irrenunciables⁷.

Sin embargo a folio 80 se observa que el demandante agotó la conciliación prejudicial ante la Procuraduría 20 Judicial para asuntos Administrativos.

4. DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN

Respecto de la caducidad de los medios de control en la interposición de la acción contencioso administrativa de nulidad y restablecimiento, el CPACA dispone sobre prestaciones periódicas:

"ARTÍCULO 164. OPORTUNIDAD PARA PRESENTAR LA DEMANDA. La demanda deberá ser presentada:

1. En cualquier tiempo, cuando:

(...)

c) Se dirija contra actos que reconozcan o nieguen total o parcialmente prestaciones periódicas (...)"

En consecuencia, al ser el caso un asunto pensional el medio de control se puede instaurar en cualquier tiempo⁸.

5. DEL PODER Y LA LEGITIMACIÓN EN ACTIVA Y PASIVA

Con relación a la legitimación por activa, se tiene a esta como la posibilidad que tiene aquella persona que ha sufrido un daño para obtener el resarcimiento mismo por medio de la jurisdicción contenciosa administrativa.

⁵ Ver folio 5

⁶ Salario mínimo 2019 (\$828.116 * 50 = \$41.405.800) - año en que se radico la demanda ver folio 82

⁷ Consejo de Estado, Sección Segunda – Subsección A, CP RAFAEL FRANCISCO SUAREZ VARGAS, providencia del 21 de febrero de 2019. Radicación número: 08001-23-31-000-2013-00160-02(0075-17) estableció: "Como consecuencia de lo anterior, y para resumir la discusión planteada por la demandada, las prestaciones periódicas como las pensionales, en este caso, la pensión gracia, tiene el carácter de irrenunciable como principio mínimo fundamental, posición que no obliga a cumplir el trámite de conciliación extrajudicial aun cuando la entidad que reconoció el derecho es quien impugna su legalidad"

⁸ Consejo de Estado, Sección Segunda – Subsección A, CP RAFAEL FRANCISCO SUAREZ VARGAS, providencia del 21 de febrero de 2019. Radicación número: 08001-23-31-000-2013-00160-02(0075-17) estableció "Para el sub judice, es claro que el numeral 1), del artículo 164, del CPACA, determina que la demanda podrá presentarse en cualquier tiempo, cuando las pretensiones versen sobre prestaciones periódicas, de manera que, como la controversia tiene relación con ese tipo de prestaciones, no está sometida al término de caducidad y se puede demandar en cualquier tiempo".

El artículo 160 del CPACA, respecto al derecho de postulación versa:

“Quienes comparezcan al proceso deberán hacerlo por conducto de abogado inscrito, excepto en los casos en que la ley permita su intervención directa.”

A folios 7 y 8, obra poder otorgado por la parte demandante, para que se lleven a cabo las presentes diligencias, razón por la cual se encuentra debidamente configurado el derecho de postulación.

Frente a la legitimación y la representación de las entidades dispone el artículo 159 del CPACA:

“Las entidades públicas, los particulares que cumplen funciones públicas y los demás sujetos de derecho que de acuerdo con la ley tengan capacidad para comparecer al proceso, podrán obrar como demandantes, demandados o intervinientes en los procesos contencioso administrativos, por medio de sus representantes, debidamente acreditados.

La entidad, órgano u organismo estatal estará representada, para efectos judiciales, por el Ministro, Director de Departamento Administrativo, Superintendente, Registrador Nacional del Estado Civil, Procurador General de la Nación, Contralor General de la República o Fiscal General de la Nación o por la persona de mayor jerarquía en la entidad que expidió el acto o produjo el hecho.

El Presidente del Senado representa a la Nación en cuanto se relacione con la Rama Legislativa; y el Director Ejecutivo de Administración Judicial la representa en cuanto se relacione con la Rama Judicial, salvo si se trata de procesos en los que deba ser parte la Fiscalía General de la Nación.”

El apoderado de la parte demandante dentro de la descripción fáctica hecha en el escrito de demanda, hace imputaciones contra el Ministerio de Educación – FOMAG y municipio de Cali. En ese orden de ideas, la parte demandante y la entidad demandada están legitimadas, por activa y por pasiva respectivamente, para actuar en las presentes actuaciones.

El artículo 610 del CGP indica la intervención de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado en los procesos que se tramiten ante cualquier jurisdicción en la que intervengan entidades públicas, para defender los intereses patrimoniales del Estado.

Pues bien, el Decreto 4085 de 2011, respecto del objetivo de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, señala:

"ARTÍCULO 2o. OBJETIVO. La Agencia tendrá como objetivo el diseño de estrategias, planes y acciones dirigidos a dar cumplimiento a las políticas de defensa jurídica de la Nación y del Estado definidas por el Gobierno Nacional; la formulación, Evaluación y difusión de las políticas en materia de prevención de las conductas antijurídicas por parte de servidores y entidades públicas del daño antijurídico y la extensión de sus efectos, y la dirección, coordinación y ejecución de las acciones que aseguren la adecuada implementación de las mismas, para la defensa de los intereses litigiosos de la Nación.

PARÁGRAFO. Para efectos este decreto. Entiéndase por intereses litigiosos de la Nación, los siguientes:

- a) Aquellos en los cuales esté comprometida una entidad de la Administración Pública del orden nacional por ser parte en un proceso”.

Por tratarse en el presente asunto de una entidad del orden nacional, se deberá notificar a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado al correo electrónico, conforme lo indica el parágrafo del artículo 3 del Decreto 1365 de 2013 que dice:

"Para efectos de las notificaciones personales que se deban realizar a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, se entenderá que el correo electrónico cumple los mismos propósitos que el servicio postal autorizado para enviar la copia de la demanda, de sus anexos y del auto admisorio, en los términos del artículo 197 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. En estos casos, no será necesaria la remisión física de los mencionados documentos".

6. DE LOS REQUISITO FORMALES.

De igual forma se cumple con la totalidad de los requisitos establecidos en los artículos 162 (requisitos de la demanda⁹), 163 (individualización de pretensiones) y 164 (oportunidad de la demanda) de la Ley 1437 de 2011.

Aunado a lo anterior se allegaron los anexos pertinentes que exige el art. 166, incluyendo copia de la demanda en mensaje de datos para los efectos del inciso 3 del art. 199, modificado por el art. 612 de la Ley 1564 de 2012.

Por reunir los requisitos legales el Despacho,

RESUELVE

PRIMERO: ADMITIR la demanda instaurada por la señora **LETICIA LONDOÑO JARAMILLO** por medio de apoderado judicial, en contra de la **NACION – MINISTERIO DE EDUCACION – FOMAG, MUNICIPIO DE CALI y ALBA MARINA DIAZ SERNA**, y en consecuencia dispone:

SEGUNDO: NOTIFICAR este auto al demandante en la forma prevista en el artículo 201 del CPACA, quien podrá consultarlo en la página web: www.ramajudicial.gov.co.

TERCERO: No hay lugar a fijar gastos ordinarios del proceso, pues la notificación personal corresponde a la parte actora; no obstante, de requerirse expensas, éstas se fijarán en su oportunidad.

CUARTO: NOTIFICAR personalmente la presente providencia a la parte demandada **NACION – MINISTERIO DE EDUCACION – FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO - FOMAG, MUNICIPIO DE CALI** y señora **ALBA MARINA DIAZ SERNA**, al señor **AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO** y a la **AGENCIA NACIONAL DE LA DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO** a los buzones de correo electrónico creados por dichas entidades para efecto de recibir notificaciones judiciales de conformidad con lo establecido en los artículos 197, 198 y 199 del CPACA.

⁹ Designación de las partes: folio 1
Pretensiones: folios 1 - 2
Hechos y omisiones: folios 2 - 3
Fundamentos de derecho: folios 3 - 4
Pruebas: folios 4 - 5
Estimación razonada de la cuantía: folio 5
Dirección para notificación: folio 15



Como no se fijan gastos ordinarios del proceso, para cumplir lo anterior, **ORDENAR a la parte demandante**, de acuerdo con el artículo 199 del CPACA, **remitir** a quienes deben ser notificados personalmente, en el término improrrogable de DOS (02) DÍAS HÁBILES, contados a partir de la notificación por estado de la presente providencia, a través del servicio postal autorizado, copia de la demanda, de sus anexos y de este auto admisorio, sin perjuicio de las copias que deban quedar en el expediente a disposición de los notificados.

Así mismo, deberá aportar, dentro de los CINCO (05) DÍAS HÁBILES siguientes a la notificación por estado de la presente providencia, certificación de la entidad de servicio postal autorizado, en la que conste la remisión efectiva de la copia de la demanda, sus anexos y del auto admisorio, para lo cual allegará copia del oficio remisorio a la Secretaría del Tribunal.

Hasta tanto no se alleguen las constancias anteriormente referidas, la Secretaría de esta Corporación no realizará la notificación personal a los demandados. El incumplimiento de esta carga procesal dará lugar a la aplicación del artículo 178 del CPACA.

QUINTO: A las demandadas **NACION – MINISTERIO DE EDUCACION – FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO - FOMAG, MUNICIPIO DE CALI** y a la señora **ALBA MARINA DIAZ SERNA**, al señor **AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO** y a la **AGENCIA NACIONAL DE LA DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO** se les correrá traslado de esta demanda por el término de treinta (30) días para contestarla, proponer excepciones, pedir pruebas, llamar en garantía y en su caso, proponer demanda de reconvencción, acorde con el artículo 172 del CPACA. Este plazo comenzará a correr al vencimiento del término común de veinticinco (25) días después de surtida la última notificación, como dispone el artículo 199 del CPACA.

SEXTO: ADVERTIR a la entidad demandada que durante el tiempo para dar respuesta a la demanda, deberá allegar con la contestación, **el expediente administrativo que contenga los antecedentes de la actuación que se demanda** y se encuentre en su poder. La inobservancia de este deber constituye falta disciplinaria gravísima del funcionario encargado del asunto (artículo 175, parágrafo 1º del CPACA).

SEPTIMO: RECONOCER PERSONERÍA para actuar, como apoderado de la parte demandante, al abogado RODRIGO CID ALARCON LOTERO, identificado con cédula de ciudadanía No. 16.478.542 y portador de la tarjeta profesional No. 73.019 del Consejo Superior de la Judicatura, en los términos y para los efectos a que alude el memorial poder por el presentado¹⁰.

NOTIFÍQUESE Y CUMPLASE,


EDUARDO ANTONIO LUBO BARROS
Magistrado

¹⁰ Ver folios 7 - 8
AAGG
VoBo Secretario 

NOTIFICACION POR ESTADO
El auto anterior se notifica por
Estado No. **060**
de **5 AGO 2020**
arbitral, en cumplimiento del artículo 178 del CPACA